

6ª REUNION — 5ª SESION ORDINARIA — JUNIO 29 DE 1973

Presidencia de los señores diputados Raúl Alberto Lastiri y Salvador F. Busacca

Secretarios: doctor Alberto L. Rocamora y señor Ludovico Lavia

DIPUTADOS PRESENTES:

ACEVEDO, Carlos Luis
ACUÑA, Hipólito
AGUIRRE, Mario D.
AGUIRRE de SAIBENE, Luisa E.
ALVAREZ GUERRERO, Osvaldo
AMADO SALEME, José
AMAOLO, Mario O.
AMAYA, Mario Abel
AMERISE, José Carmelo
ARAGONÉS, Carlos Osvaldo
ARANA, Tomás Pedro
ARATA, Juan Carlos
ARBO, Tomás Ameghino
ARCE, Rodolfo Juvenio
ARIANI, Adriano
ARIGOS, Ramón Eduardo
ARRAYA, Jorge Francisco
ARRUE, Willebrordo
ASMAR, Ramón
AUYERO, Carlos Alberto Camilo
ÁVILA, Agustín Alfredo
AZURMENDI, Ernesto
BAJCZMAN, Raúl I.
BALESTRA, Ricardo Ramón
BARBARO, Julio D.
BARRIONUEVO, Roque R.
BEHERAN, Arnoldo Mario
BELLISIO, Victorio Alberto
BENEDETTI, Osvaldo Ernesto
BONAS, Abraham Efraim
BONIFATTI, Arelinda S. A.
BORRAS, Raúl Antonio
BRAVO, Carlos Alberto
BRAVO, Federico S.
BRITO LIMA, Alberto
BUSACCA, Salvador F.
BUSTOS, Tomás Roberto
CABANA, Manuel I.
CABEZAS, José Humberto
CALABRESE, Pablo
CAMPBELL, Oscar S.
CAMPOS, Ernesto Manuel
CAMUS, Jorge M.
CAPILLO, José
CÁRDENAS, Juan Carlos
CARRAL TOLOSA, Humberto
CARRERAS, Ruperto R.
CASAZZA, Luis Angel
CASTELLANO, Hugo Luis
CATALANO, José Armando
CITATI, Angel
COLELLO, Clemente J.
COMINGUEZ, Juan Carlos
COSSY ISASI, Edgar

COSTARELLI, José
CROATTO, Armando Daniel
CROCCO, Luis Ferdinando
CHAQUIREZ de PALACIOS, Maria
D'ANGELO, Lorenzo Francisco
DAVICO, Miguel Angel
DAY, Alberto Ricardo
DE APARICI, Ricardo José Manuel
DE LUCA, Ricardo
DESPERBASQUES, Rodolfo Eduardo
DÍAZ ORTIZ, Santiago Francisco
EGUIREUN, Enrique
ESPECHE, Juan Bautista
ESPONDABURU, Raúl Horacio
ESQUIVEL, Faustino
ESTIGARRIA, Agustín Tomás
FADUL de SOBRINO, Esther Mercedes
FALABELLA, Francisco José
FALU, Ricardo Munir
FARIAS, Eduardo Isidro
FERNÁNDEZ, Dante Dionisio
FERNÁNDEZ, Juan Máximo
FERNÁNDEZ BEDOYA, Mariano
FERNÁNDEZ GILL, Guillermo Carlos
FERNÁNDEZ VALONI, José Luis
FERREYRA, Jorge Washington
FLORES, José Maria F.
FONTE, Carlos A.
FRANCO, Hugo Armando
FRESCHI, Pedro José
FUENTES, Pedro Alfredo
GALVAN, Raúl Alfredo
GALLO, Carlos R.
GANEM, Héctor
GARCÍA, Luis Antonio
GARONA, Alberto A.
GARRE, Nilda Celia
GASS, Adolfo
GIMÉNEZ, Nicolás Alberto
GLELLEL, Jorge
GOLÉ, Tomás Juan B.
GONZALEZ, Ricardo A.
GRAU, Mario Agustín
GUALCO, Jorge Nelson
GUZMÁN de ANDREUSSI, María Cristina
HAIEK, José
HARRINGTON, Luis José D.
HUEYO, Horacio
HUGHES, Gilbert
IMBAUD, Carlos Alfredo
INSUA, Carlos Raúl
ITURRIETA, Aníbal A.
KELLY, Rodolfo Feliciano
KUNKEL, Carlos Miguel
LABAKE, Juan Gabriel
LASTIRI, Raúl Alberto

LATRUBESSE, Francisco Alberto
LAVALLE, Mario
LAZZARINI, José Luis
LENCINA, Luis A.
LEPEZ, Lysis Augusto
LIMA, Hugo Ramón
LITERAS, Maria Haydée Acevedo de
LOPEZ, Domingo
LOPEZ, Horacio Fidel
LOPEZ, Miguel Angel
LORENCES, Mariano Rufino
LUCENA, Luis Arnaldo
LUMELLO, José Erio
LLORENS, Roberto Oscar
MACRIS, Antonio J.
MALDONADO, Clemente
MARINO, Rafael Francisco
MARQUEZ, Alfonso Carlos
MARTÍNEZ, Juan Antonio
MARTÍNEZ, Pedro Nicolás
MARTOS, Mario Saúl
MASSOLO, Eduardo A. R.
MASTOLORENZO, Vicente
MAUHUM, Fernando Hugo
MERA FIGUEROA, Julio I.
MERCHENSKY, Marcos
MIGLIOZZI, Julio Alberto
MIGUEL, Pedro Honorio
MIRA, Jesús
MOLINA, Gilberto R.
MOLINA, Manuel Isaura
MOLINA ZAVALIA, Armando
MOLINARI ROMERO, Manuel Ernesto
MONACO, Horacio Miguel
MONSALVE, Evaristo A.
MONTERO TELLO, Régulo L.
MORAL, Angel
MORENO, Antonio E.
MORENO FERRER, José Carlos W.
MORINI, Maria Teresa Merciadri de
MOYANO, Francisco J.
MUNIZ BARRETO, Diego
MUSACCHIO, Vicente Miguel
MUSSO, Eufemia
NARANJO, Desio B.
NATALE, Ricardo T.
NICOLICHE, Lisardo Oscar
NOSIGLIA, Plácido Enrique
ODENA, Isidro J.
OSELLA MUÑOZ, Enrique Emilio
PALACIO DEHEZA, Carlos
PARENTE, Rodolfo Domingo
PASCUAL, Paulino Rubén
PATALAGOITIA, Osvaldo E.
PAZ, Guido Ulises
PEDRINI, Ferdinando

PEREIRA, Antonio
 PETRUCCELLI, Agustín
 PONCE, Rodolfo Antonio
 PORTERO, Héctor
 PORTO, Jesús Edelmiro
 RABANAL, Rubén Francisco
 RACCHINI, Juan Nicolás
 RAFAEL, Juan
 RAMÍREZ, Juan Manuel
 RATTI, Luis Carlos
 RITVO, Miguel
 RIZO, Eusebio Víctor
 RODRÍGUEZ, Alfredo S.
 RODRÍGUEZ FLORES, Argentina
 ROJAS, Ramón Pablo
 ROLANDO, Esteban Domingo
 ROMÁN, Irene Graciela
 ROMERO, Carlos Alberto
 ROMERO, Juana N.
 ROSAS, Alberto Horacio
 ROTA, Silvana María I.
 RUBEO, Luis
 RUIZ VILLANUEVA, Arturo
 SALIM, Luis
 SALOMÓN, Jorge
 SALVADOR, Nicolás
 SALVATIERRA, Julio Domingo

SAMBUEZA, Osvaldo
 SANCHEZ AHUMADA, Luis Alberto
 SANCHEZ TORANZO, Nicasio
 SANDLER, Héctor Raúl
 SANGIACOMO, Ricardo Arturo
 SANGUINETI, Virginia Luisa
 SARBOLI, Rubén Juan
 SARLI, Osvaldo Raúl
 SAÚL, Roberto
 SERVINI GARCÍA, Clara Cristina
 SILEONI, Nelo I.
 SILVA, Analicio
 SLAMOVITS, Ludovico
 SOBRINO ARANDA, Luis Alberto
 SOLANA, Jorge D.
 STECCO, Alberto Eleodoro
 SUÁREZ, Humberto F.
 SUÁREZ, Leopoldo M.
 SUELDO, Horacio Jorge
 SULETA de ARRAYA, Arminda
 SVRSEK, Enrique A.
 TACHELLA, Eliberto Santos J.
 TAGLIAFERRO, Jorge
 TOLLER, Roberto Lino
 TRABOULSI, Eduardo Elías
 TRÓCCOLI, Antonio A.
 TULA DURÁN, Joaquín

URDÍNEZ de VOLPE, Clotilde Isolina
 VACCAREZZA, Eduardo H.
 VALENZUELA, Héctor R.
 VALERI, Salvador
 VAZQUEZ POL, José
 VERGARA, Roque Antonio
 VESCO, José Luis
 VIALE, Jorge Omar
 VIDANA, Roberto
 VILLALBA, Bernardo Samuel
 VINARDELL MOLINERO, Miguel
 VINTI, Carmelo
 VITTAR, Rodolfo Oscar
 ZAMANILLO, José Miguel
 ZAPATA, Hipólito Bernardo

AUSENTES, CON LICENCIA

BARTOMIOLI, Héctor Luis
 BLANCO, Manuel
 GAITÁN, Adelmo Alberto
 GUERRERO, Antonio Isaac
 LLANO, Juan Pedro
 MOMBELLI, Fausto J.

AUSENTE, CON PERMISO

VILLADA, Mario Anselmo

SUMARIO

1.—Manifestaciones en minoría. (Pág. 539.)

2.—Izamiento de la bandera nacional. (Pág. 539.)

3.—Versiones taquigráficas. (Pág. 540.)

4.—Asuntos entrados:

I.—Poder Ejecutivo:

- 1.—Mensaje y proyecto de ley: política arancelaria en defensa del trabajo y la producción nacional. (Pág. 540.)
- 2.—Mensaje y proyecto de ley: régimen de promoción industrial. (Pág. 543.)
- 3.—Mensaje y proyecto de ley: régimen de promoción minera. (Pág. 550.)
- 4.—Mensaje y proyecto de ley: represión penal del delito de defraudación al fisco. (Pág. 556.)
- 5.—Mensaje y proyecto de ley: régimen de fomento agrario. (Pág. 558.)
- 6.—Mensaje y proyecto de ley: condonación de sanciones por infracciones cometidas con relación a los gravámenes que recauda la Dirección General Impositiva. (Pág. 560.)
- 7.—Mensaje y proyecto de ley: régimen para la radicación de capitales extranjeros. (Pág. 562.)
- 8.—Mensaje y proyecto de ley: creación del impuesto a la renta normal potencial a las tierras aptas para la explotación agropecuaria. (Pág. 568.)

II.—Comunicación de la Presidencia. (Página 573.)

III.—Dictámenes de comisión. (Pág. 573.)

IV.—Comunicación de señor diputado. (Página 573.)

V.—Comunicaciones oficiales. (Pág. 573.)

VI.—Peticiónes particulares. (Pág. 574.)

VII.—Proyectos de ley:

- 1.—Del señor diputado **Mira y otros**: prohibición del funcionamiento de agencias privadas de colocación de personal temporario. (Pág. 575.)
- 2.—Del señor diputado **Gallo**: dejando sin efecto el convenio relativo a la explotación y administración de los hipódromos de Palermo y San Isidro. (Pág. 575.)
- 3.—Del señor diputado **Bellisio**: asistencia económica a poblaciones de la provincia de Buenos Aires afectadas por las inundaciones. (Pág. 576.)
- 4.—De los señores diputados **Márquez y Naranjo**: reincorporación de agentes de Ferrocarriles Argentinos. (Página 577.)
- 5.—De los señores diputados **Nicoliche y Rosas**: ubicación de las administraciones de los entes nacionales afectados a la extracción y explotación de combustibles. (Pág. 578.)
- 6.—Del señor diputado **Fernández Gill**: reimplantación de la vigencia de las leyes 12.637 y 16.057, y derogación de las leyes 14.794, 18.027 y 17.393. (Página 578.)
- 7.—De la señora diputada **Guzmán de Andreussi**: retiro voluntario de la mujer. (Pág. 579.)

exclusiones del artículo 1º, deberán desistir de la acción y el derecho relativos a tales causas para poder acogerse al régimen de esta ley.

Art. 12. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

José B. Gelbard.

—A la comisión de Presupuesto y Hacienda.

7

Buenos Aires, 14 de junio de 1973.

Al Honorable Congreso de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad, a fin de elevar a su consideración el adjunto proyecto de ley por el cual se registrarán las inversiones de capital extranjero en nuestro país.

La necesidad del dictado de una norma legislativa como la propuesta se basa en las particulares condiciones que ha asumido la evolución de la economía mundial, tanto en lo que respecta a la creciente importancia de los movimientos internacionales de capitales como a la influencia alcanzada por las empresas multinacionales en el mismo.

Por ello, todos los países en proceso de liberación de la dependencia externa se han planteado la necesidad de establecer normas que regulen las inversiones externas y adecuen la actividad de las empresas multinacionales al interés nacional. A nuestro país le cabe el mérito de haber sido uno de los primeros en legislar en este aspecto, con el dictado del decreto 3.347/48 y, muy especialmente, de la ley 14.222, en el año 1953. Hasta ese momento no existió ningún régimen especial para las radicaciones de capital extranjero, las cuales estaban reguladas por disposiciones generales del Banco Central en cuanto al manejo de las divisas.

La citada ley 14.222 tenía por objetivo «formar las industrias básicas y economizadoras de divisas que operan con tecnología avanzada». A tal fin se alentaban las radicaciones de capitales, a las cuales se asignaba una cierta cantidad de beneficios, entre ellos, la posibilidad de exención impositiva y la introducción libre de impuestos, de las maquinarias y equipos necesarios para la explotación. Asimismo, dichos capitales quedaban sujetos a la legislación argentina y equiparados a los nacionales.

Pero, al mismo tiempo, dicha ley introdujo un aspecto fundamental: la necesidad de controlar las remesas de utilidades y los giros por repatriación del capital, a efectos de impedir las inversiones especulativas a corto plazo. Estas restricciones estaban destinadas a controlar y orientar la radicación efectiva de los capitales extranjeros de acuerdo con los principios de independencia económica sustentados por el gobierno nacional. El capital ingresado sólo al cabo de dos años podría enviar utilidades al exterior, siempre y cuando estas remesas no superaran el 8 % del capital invertido. Las utilidades excedentes de dicho tope, al igual que las que pudiendo ser transferidas no lo fueron en su momento, no eran registradas como capital externo. Estas utilidades no podían girarse al exterior ni acumularse al capital originario, no pudiendo, por lo tanto, ser computadas sobre ellas las utilidades pasibles de ser remitidas al exterior ni el capital original en el caso de repatriación. Por su parte, la repatriación del capital

sólo era permitida al cabo de diez años de radicado el mismo, para ser efectuada en cuotas (entre el 10 y el 20 % del capital), cuidando no afectar el desenvolvimiento normal de la planta.

Por su parte, el decreto 19.111/53 reglamentario de la ley 14.222 determinaba que tanto la remesa de utilidades como la repatriación del capital se hiciera con fondos propios de la empresa. De esta forma, se impedía el uso del financiamiento interno, bancario o extrabancario, para tales fines.

El proyecto que se eleva retoma las principales características de la ley mencionada, adaptándolas de acuerdo con las circunstancias actuales, particularmente de la Decisión Nº 24 sobre Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros de los países del Pacto Andino.

Con los regímenes de carácter liberal en la materia se han producido los siguientes efectos:

- Tendencia al uso intensivo del crédito interno, absorbiendo fondos locales que, en gran medida, concurrían a financiar la inversión. De este modo, las radicaciones efectivas eran, en los hechos, menores que las autorizadas.
- Tendencia a remitir utilidades al exterior sin limitaciones y en cantidades que, en muy pocos años, igualan o superan el monto inicial de la inversión.
- Concentración de sectores industriales íntegros en manos de grandes corporaciones multinacionales, con la consecuente disminución del poder de decisión nacional en la industria. Marcada tendencia al establecimiento de figuras monopólicas en el sector.
- Concentración de las inversiones en sectores de alta rentabilidad, cuyo mercado interno era protegido con elevados recargos aduaneros.
- Tendencia a la importación indiscriminada de equipos y materias primas, desalentando el desarrollo de las industrias locales proveedoras de los mismos.
- Tendencia a la absorción de empresas nacionales, incentivadas por tipos de cambio favorables y por condiciones excesivamente liberales en cuanto al control de dichos movimientos.

Todas estas características contribuyeron a establecer y sostener una economía con marcados rasgos de dependencia externa. La situación de dependencia que trae consigo la política liberal aplicada a las inversiones extranjeras asume múltiples formas, entre las que pueden señalarse las siguientes:

- El centro de decisión de la política económica en sectores claves de la industria se ubica fuera de las fronteras del país, en manos de las grandes empresas multinacionales.
- El país dependiente adopta las pautas de consumo de los países dominantes, con la consiguiente orientación de los recursos hacia sectores productores de bienes destinados a las capas de mayores ingresos de la población.
- Introducción de tecnología ligada al consumo de los estratos privilegiados de la sociedad. En este sentido, la dependencia se acentúa cuanto mayor es el ritmo de renovación tecnológica en los países dominantes.
- Introducción de industrias con alta intensidad de capital, lo cual reduce las posibilidades de realizar

inversiones en la parte del aparato productivo que se destina a satisfacer las necesidades del conjunto de la población.

- Control de la difusión tecnológica por grupos ubicados fuera de las fronteras nacionales.

Ante el panorama que presenta el problema de la inversión extranjera en nuestro país, es necesario que el Estado tome una política firme y coherente frente al mismo. Dicha política estará basada en los principios de independencia económica, soberanía política y justicia social sostenidos por el gobierno nacional. Esto implica que, si bien se reconocen las ventajas que puede traer el aporte del capital externo, éste deberá ajustarse al interés nacional, a las prioridades determinadas por el gobierno y a las modalidades fijadas por la legislación específica para operar en el mercado interno.

Así mismo, es necesario tomar medidas que tiendan a la reargentinización de las empresas de capital interno que fueron adquiridas por inversores extranjeros, como parte fundamental del proceso de liberación nacional en que el país está empeñado.

El proyecto de ley comprende tanto a las radicaciones de capitales como a las operaciones financieras que obligan a personas domiciliadas en el país con respecto a personas domiciliadas en el extranjero.

Con referencia a las radicaciones de capitales se establecen claramente las características que deben reunir para su aprobación. La evaluación de las inversiones propuestas se efectuará de acuerdo con criterios que aseguren, entre otros, los siguientes objetivos fundamentales: la plena ocupación de los recursos productivos, la generación de tecnología nacional, la elevación de las condiciones de vida de la población, el mejoramiento del balance de pagos internacionales y el desarrollo equilibrado en el plano regional. El proyecto prohíbe la autorización de las inversiones destinadas a sectores de la actividad productiva que por su naturaleza deben reservarse al capital nacional y de los que estén sometidos a limitaciones en la exportación de sus productos o pretendan substraer el conocimiento de las controversias jurídicas de los tribunales argentinos.

Con el fin de salvaguardar el interés nacional y asegurar el logro de los objetivos mencionados, las inversiones extranjeras sólo podrán realizarse en el futuro a través de contratos individuales por un plazo determinado y renovable celebrados con la autoridad de aplicación, en los que se preverá el monto y destino de la radicación, la tasa máxima de utilidades que podrán girarse al extranjero. El proyecto establece, así mismo, el procedimiento por el cual la autoridad de aplicación podrá autorizar la reinversión de utilidades.

Otro aspecto de significación en el proyecto que se adjunta es la limitación del endeudamiento externo de las empresas extranjeras, el cual estará sujeto a la aprobación del Banco Central y de la autoridad de aplicación. De este modo, se evita que dichas empresas puedan remitir utilidades ocultas bajo forma de intereses, así como posibles dificultades a la balanza de pagos del país debido al endeudamiento incontrolado de las mismas.

Como parte del proceso de ordenamiento de la inversión extranjera a las condiciones determinantes de la etapa de reconstrucción nacional es necesario también consagrar el principio de respeto a los compromisos estatales que se asumirán conforme a las pautas de la presente ley. La seguridad jurídica den-

tro de los principios establecidos será garantizada por el gobierno popular como basamento fundamental para la estructuración de relaciones de interés recíproco, pero orientados hacia la grandeza nacional.

De acuerdo con la fundamentación precedente, considero que el proyecto de ley que se eleva contribuirá eficazmente al proceso de liberación nacional que se inicia, y que constituye un objetivo prioritario del gobierno nacional.

Todas estas razones han decidido al Poder Ejecutivo nacional a propiciar la iniciativa contenida en el proyecto de ley adjunto, descontando que vuestra honorabilidad compartirá el criterio sustentado y prestará su sanción al mismo.

Dios guarde a vuestra honorabilidad.

HÉCTOR J. CÁMPORA.
José B. Gelbard.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

I. Ambito

Artículo 1º — La presente ley regirá en todo lo concerniente a:

a) Las radicaciones directas de capital extranjero en:

1. Divisas que se transfieran para su inversión en los sectores que determine el Poder Ejecutivo.
2. Bienes de capital y sus repuestos en la proporción indispensable que apruebe la autoridad de aplicación y cuya enajenación a cualquier título quedará prohibida en el contrato de radicación por el término que se establezca conforme a los bienes de que se trate.
3. Créditos externos en divisas que se capitalicen, siempre que el destino a que hayan sido aplicados esos créditos justifique, a criterio de la autoridad de aplicación, la autorización de su radicación en los términos de esta ley y los créditos externos en moneda nacional que cumplan iguales requisitos.
4. Utilidades provenientes de inversiones extranjeras, en condiciones de ser remesadas al exterior.
5. Títulos de la deuda externa nacional, cuando así lo apruebe la autoridad de aplicación, previo informe del Banco Central de la República Argentina teniendo en cuenta las condiciones de la balanza de pagos y el análisis del caso en particular;

b) Los créditos que obliguen como deudores a personas físicas o jurídicas de derecho público o privado domiciliadas en el país, con acreedores domiciliados en el exterior, de los que surjan, o puedan surgir derechos u obligaciones a transferir valores al exterior en concepto de amortización de capital o de pago de intereses;

c) Los contratos o convenios, de cualquier naturaleza, entre personas físicas o jurídicas de derecho público o privado domiciliadas en el país, y acreedores domiciliados en el exterior, en virtud de los cuales surjan o puedan surgir

derechos u obligaciones a transferir valores al exterior. Se exceptúan los contratos de uso de tecnología, de transporte y de seguros.

II. Definiciones

Art. 2º — A los efectos de las regulaciones contenidas en la presente ley, las empresas locales quedan clasificadas de la siguiente manera:

- a) Empresas de capital extranjero. Se entiende por tales aquellas cuyo capital nacional sea inferior al cincuenta y uno por ciento (51 %) del capital;
- b) Empresas con participación de capital nacional y extranjero. Se entiende por tales aquellas cuyo capital nacional, privado o estatal sea del cincuenta y uno por ciento (51 %) al ochenta por ciento (80 %) del capital de la empresa, posean poder jurídico de decisión y respecto de las cuales se acredite que la efectiva dirección técnica, administrativa, financiera y comercial de la empresa corresponde a los inversores nacionales;
- c) Empresas de capital nacional. Se entiende por tales aquellas en que los inversores nacionales posean una participación superior al ochenta por ciento (80 %) del capital de la empresa y poder jurídico de decisión y respecto de las cuales se acredite que la efectiva dirección técnica, administrativa, financiera y comercial de la empresa corresponde a los inversores nacionales.

Art. 3º — Se entiende por:

- a) Inversor extranjero: toda persona física o jurídica domiciliada fuera del territorio nacional, titular de un aporte de capital a radicar o ya radicado en empresas de las clases definidas en el artículo 2º;
- b) Inversor nacional: toda persona física domiciliada en el país o toda persona jurídica constituida de acuerdo con las leyes del país, y domiciliada en éste, cuyos capitales estén en manos de personas físicas domiciliadas en el país que no representen directa o indirectamente a personas físicas o jurídicas extranjeras, y el Estado nacional o provincial o municipal y sus dependencias, organismos de cualquier grado de descentralización y empresas estatales;
- c) Domicilio: es el definido por el artículo 89 del Código Civil.

III. De las radicaciones

Condiciones

Art. 4º — Los inversores extranjeros que deseen radicar capital extranjero en el país conforme a lo establecido en el artículo 1º, inciso a), deberán solicitar previamente autorización a la autoridad de aplicación, la que efectuará la evaluación y negociación correspondiente. Las radicaciones se instrumentarán por medio de un contrato de radicación entre dicha autoridad y los inversores extranjeros, el que deberá ser sometido a la aprobación del Poder Ejecutivo nacional, cuando dé lugar a la constitución de una empresa del tipo referido en el artículo 2º, inciso b), o del Honorable Congreso de la Nación

cuando origine la constitución de una empresa del tipo establecido en el inciso a) del mismo artículo.

Art. 5º — Los contratos de radicación proveerán al cumplimiento de los requisitos siguientes:

- a) Que la radicación se efectúe en las actividades y zonas geográficas determinadas prioritariamente por el Poder Ejecutivo;
- b) Que contribuya a un mejor empleo de los recursos humanos y naturales del país;
- c) Que tienda a mejorar las condiciones de vida de la población;
- d) Que adopte los recaudos necesarios a fin de impedir o limitar la contaminación ambiental;
- e) Que los bienes o servicios a producir posibiliten una sustitución de importaciones o sean objeto de exportaciones a través de un compromiso expreso, debiendo dejar un beneficio neto para el país en cuanto al balance de divisas de la radicación, computándose para su cálculo los probables egresos por repatriación de capital, utilidades, amortizaciones, intereses, regalías, importaciones —incluso las indirectas a través de los insumos— y otros egresos;
- f) Que incorpore la tecnología necesaria para los objetivos socioeconómicos del país contemplando el desarrollo local de investigaciones y estudios de tecnología aplicada en el área que corresponda y la generación de tecnología nacional;
- g) Que emplee personal directivo, científico, técnico y administrativo de nacionalidad argentina, en la proporción que en cada caso indique la autoridad de aplicación;
- h) Que no signifique el desplazamiento actual o futuro del mercado de empresas de capital nacional;
- i) Que no requiera una captación de ahorro interno superior a los límites que se establezcan en virtud de esta ley, y que garantice una adecuada estructura financiera para cumplir con la evolución de la actividad a que se destine.

Prohibiciones

Art. 6º — No serán autorizadas nuevas radicaciones que:

- a) Estén sujetas a limitaciones de sus posibilidades de exportar o condicionen las exportaciones a acuerdos o convenios limitativos de cualquier naturaleza;
- b) Sustraigan los posibles conflictos o controversias a la jurisdicción y competencia de los tribunales argentinos o permitan la subrogación por Estados o personas jurídicas internacionales de las acciones y derechos de los inversores extranjeros;
- c) Se destinen a los sectores de:
 1. Actividades relacionadas con la defensa y seguridad nacional.
 2. Servicios públicos, entendiéndose por tales la prestación de servicios sanitarios, energía, transporte, telecomunicaciones y servicios postales.
 3. Seguros, banca comercial —excepto las sucursales de bancos extranjeros cuando exista un régimen de reciprocidad y convenga

a los intereses nacionales— y actividades financieras.

4. Publicidad, radioemisoras y estaciones de televisión, diarios, revistas y editoriales.
5. Servicios de comercialización interna de productos de cualquier índole, con exclusión de los de su propia elaboración.
6. Actividades que por ley estén reservadas a empresas estatales o a empresas de capital nacional, sin perjuicio de las normas que fijen para la subcontratación con empresas privadas.
7. Actividades agrícola-ganaderas y forestales.
8. Toda incorporación de nuevos sectores a la lista precedente deberá disponerse por ley;

- d) Que tengan por objeto la adquisición de acciones, cuotas, participaciones sociales de cualquier tipo y fondos de comercio destinados a la producción o comercialización de bienes, existentes en el país y pertenecientes a empresas de capital nacional, salvo que la adquisición de activos físicos o fondos de comercio se efectúe en el proceso de liquidación por quiebra de una empresa nacional, y en condiciones que, de acuerdo con la legislación específica, aseguren igual posibilidad de concurrencia a la adquisición a inversores nacionales.

Art. 7º — Para las actividades no enumeradas en el artículo 6º, inciso c), la autoridad de aplicación dará preferencia a las radicaciones que se soliciten para ser efectuadas en empresas del tipo indicado en el artículo 2º, incisos b) y c), si el solicitante se obliga a:

- a) Un programa de transformación de la empresa en empresa de capital nacional en un término de diez (10) años, debiendo haberse integrado por lo menos el veinte por ciento (20 %) dentro de los primeros cinco (5) años y el resto en proporciones no menores al dieciséis por ciento (16 %) anual;
- b) Garantizar la exportación progresiva de su producción en el volumen y plazos que deberán determinarse en el contrato de radicación.

Art. 8º — Cuando una radicación extranjera sea autorizada para una actividad que suponga agotamiento de las fuentes de recursos, la autorización preverá expresamente que no se permitirán amortizaciones por agotamiento fuera de las establecidas con carácter general por las leyes tributarias.

Art. 9º — La radicación del capital extranjero deberá estar representada en todos los casos por acciones, cuotas o participaciones de capital nominativas, y no transferibles sin el requisito de la inscripción en los libros de la sociedad, sin perjuicio de la previa autorización de la autoridad de aplicación. No podrá establecerse el voto múltiple para las participaciones de capital extranjero.

Prioridades

Art. 10. — La autoridad de aplicación otorgará prioridad a las radicaciones que, además de cumplir los requisitos establecidos en el artículo 5º, contemplen alguno de estos aspectos:

- a) Empleen mano de obra nacional desocupada y contribuyan a su instrucción;
- b) Apliquen tecnología creada o a desarrollar en el país;

- c) Utilicen materias primas, productos intermedios y bienes de capital de producción nacional;
- d) Contribuyan a la descentralización geográfica de las actividades económicas;
- e) Comprometan el depósito de las utilidades indicadas en el artículo 15, en el Banco Nacional de Desarrollo o en instituciones bancarias oficiales nacionales o provinciales con finalidades similares;

- f) Se obliguen a una reinversión de utilidades.

En los contratos de radicación se determinarán expresamente las causales de prioridad consideradas, estableciéndose las obligaciones del inversor al respecto.

Repatriación de capital

Art. 11. — Se entiende por capital repatriable el formado por el monto de la inversión extranjera inicial autorizada y efectivamente radicada en el país, registrada en moneda de origen o similar, más las reinversiones autorizadas conforme a esta ley, menos el capital repatriado y las pérdidas netas, computadas en moneda de origen o similar, al tipo de cambio vigente en el momento de su determinación.

Art. 12. — La repatriación se realizará de acuerdo con lo establecido en el contrato de radicación o sus modificaciones, el cual:

- a) Garantizará la continuidad de funcionamiento de la empresa y la prestación del servicio en las condiciones estipuladas;
- b) Determinará la cuota anual de repatriación cuidando que la misma sea compatible con la continuidad indicada en el inciso a), no pudiendo exceder del veinte por ciento (20 %) del capital repatriable, y
- c) Establecerá un plazo inicial en el que no se realizarán repatriaciones, que no podrá ser inferior a cinco (5) años a partir de la aprobación del contrato de radicación.

Cada cuota anual de repatriación se determinará por montos fehacientemente acreditados y previa autorización de la autoridad de aplicación, en la moneda en que estuviere registrado el capital repatriable o similar al tipo de cambio vigente en el momento de la transferencia.

Transferencia de utilidades

Art. 13. — Los inversores extranjeros podrán remesar sus utilidades al exterior en la proporción que se fije en el convenio de radicación o sus modificaciones. El monto de esa transferencia no podrá ser mayor a la tasa del 12,50 % o la que exceda en cuatro puntos a la del interés que se pague, en bancos de primera línea, para la moneda en que esté registrado el capital repatriable, por depósitos a plazo fijo de ciento ochenta (180) días como máximo, considerándose para determinar el tope la tasa superior resultante de ambos supuestos. La transferencia de utilidades no podrá efectuarse con fondos provenientes de créditos externos o internos y sólo se hará con recursos líquidos propios, salvo autorización expresa de la autoridad de aplicación. Tampoco podrá efectuarse la transferencia si existen deudas exigibles de carácter fiscal o previsional.

Reinversión de utilidades

Art. 14. — La autoridad de aplicación podrá autorizar la reinversión de las utilidades con derecho a

transferencia, en la misma empresa, la que no podrá realizarse en condiciones distintas a las que estipule el contrato de radicación o sus modificaciones, y su aprobación se instrumentará por resolución de la autoridad de aplicación. La reinversión de utilidades con derecho a transferencia en otras empresas deberá ajustarse a las disposiciones de la presente ley y sus normas complementarias.

En todos los casos la inversión o reinversión se efectuará por montos fehacientemente acreditados en la moneda en que estuviere registrado el capital repatriable o similar al tipo de cambio vigente en la fecha de la autorización. La autoridad de aplicación podrá restringir el monto reinvertible a determinado porcentaje de las utilidades.

Una vez autorizada, la reinversión será considerada como una nueva radicación y dará derecho a repatriar capital y transferir utilidades conforme a lo establecido por esta ley.

Sin perjuicio de lo establecido en los párrafos precedentes, los inversores podrán reinvertir en la misma empresa, sin autorización previa y con la sola condición de su registro, sus utilidades anuales hasta el límite del cinco por ciento (5 %) del monto de la inversión autorizada.

Nacionalización de utilidades

Art. 15. — Las utilidades que anualmente excedan los porcentajes que determina el artículo 13 o cuya transferencia no se hubiere solicitado de acuerdo con lo establecido en dicho artículo, o cuya reinversión no se autorice conforme lo establecido en el artículo 14, quedarán definitivamente radicadas en el país y no podrán ser transferidas al exterior bajo ningún concepto, pero podrán ser invertidas o reinvertidas como capital local sin derecho a repatriación ni a transferencia de utilidades.

Restricciones

Art. 16. — En situación crítica de la balanza de pagos, a juicio del Banco Central de la República Argentina, las repatriaciones de capital y transferencia de utilidades podrán ser diferidas mientras aquella situación subsista, sin que ello afecte los derechos a la remesa de tales utilidades.

Art. 17. — La autoridad de aplicación fijará en cada contrato de radicación un límite máximo al endeudamiento del inversor extranjero o de las empresas extranjeras, con personas físicas o jurídicas, de derecho público o privado, domiciliadas en el país.

Dicho endeudamiento no podrá ser en ningún caso superior al monto del capital repatriable más las reservas originadas en utilidades nacionalizadas y se limitará exclusivamente al crédito interno de corto plazo en las condiciones que, para cada sector, se determinen.

Art. 18. — Los inversores extranjeros que participen en el capital de empresas que a partir de la fecha de la vigencia de esta ley obtengan beneficios por el acogimiento a regímenes promocionales, perderán el derecho previsto en los artículos 11, 12 y 13, mientras duren los beneficios u obligaciones derivados de dicho acogimiento. En ningún caso podrá otorgarse a inversores extranjeros tratamiento más favorable que el que se otorgue a inversores nacionales.

Radikaciones anteriores

Art. 19. — Las radikaciones de capital extranjero que determina el inciso a) del artículo 1º, ingre-

sadas al país en virtud de cualquier norma vigente con anterioridad a esta ley deberán inscribirse en el Registro de Inversiones Extranjeras que establece el artículo 32, en las condiciones que fije la reglamentación.

Los inversores extranjeros optarán dentro de los ciento veinte días de publicada dicha reglamentación en el Boletín Oficial por:

- a) Sujetarse a las normas de esta ley y solicitar su registro como tales, quedando en consecuencia sometidas a su régimen. En este supuesto, la autoridad de aplicación evaluará la solicitud conforme a los requisitos y al procedimiento establecido por la presente ley proponiendo al Poder Ejecutivo la aprobación de las nuevas condiciones y del contrato de radikaciones pertinente, que contemplará la transformación gradual de la empresa al tipo establecido en el artículo 2º, inciso b), si no se tratara de una empresa incluida en las restricciones del artículo 6º, en que procederá su transformación a la empresa definida en el artículo 2º, inciso c);
- b) Continuar sujetas al régimen bajo el cual se efectuaron.

A partir del vencimiento del plazo establecido, las remesas de utilidades de las empresas comprendidas en el artículo 2º, incisos a) y b), que no subscriban al convenio de radicación, estarán gravadas por un impuesto especial conforme a la siguiente escala sobre el capital repatriable con derecho a transferencia de utilidades:

Hasta el 6 %	—	20 %
más del 6 al 9 %	—	22 %
más del 9 al 12 %	—	25 %
más del 12 al 15 %	—	30 %
más del 15 %	—	40 %

Art. 20. — A los efectos de las radikaciones que determina el artículo 19 se computará como capital repatriable con derecho a transferencia de utilidades el que resulte propiedad de inversores extranjeros, efectivamente radicado en el país y fehacientemente comprobado por la autoridad de aplicación.

Art. 21. — Cuando se ejerce la opción prevista en el artículo 19, inciso a), los convenios de radicación que se celebrarán dentro de los seis meses de la opción contemplarán un programa de transformación en empresas de capital nacional, o con participación de capital nacional y extranjero, según sea el caso, que garantice un aumento progresivo de la inversión nacional hasta cumplir su transformación total.

Art. 22. — Las radikaciones extranjeras que no hubieren cumplimentado en término la obligación de inscribirse en el Registro de Inversiones Extranjeras y formulado la opción establecida en el artículo 19, no podrán registrarse y no darán derecho a repatriar capital ni remesar utilidades al exterior.

IV. Créditos externos y contratos o convenios de partes

Art. 23. — Los créditos externos previstos en el artículo 1º, inciso b), sin principio de ejecución a la fecha de publicación de la reglamentación de esta ley en el Boletín Oficial, requieren autorización previa del Banco Central de la República Argentina, conforme lo establezca la reglamentación. La autorización se otorgará previo análisis de las caracte-

rísticas generales de la operación propuesta, según las condiciones de los mercados financieros internacionales, y de acuerdo con el principio de la realidad económica. La autorización deberá quedar registrada ante el Banco Central de la República Argentina, quien podrá fijar límites globales o sectoriales de endeudamiento externo por periodos determinados.

Créditos a empresas extranjeras

Art. 24. — Los créditos externos que obliguen a empresas extranjeras quedan sujetos a las siguientes condiciones:

- a) No podrán otorgarse a dichos créditos aval bancario bajo ningún concepto;
- b) El monto de las transferencias al exterior por penalidades en que incurra la empresa extranjera, por su culpa o dolo o el de sus representantes, mandatarios o directores, se descontará directamente del monto del capital repatriable, sin perjuicio de las acciones que correspondan;
- c) Los créditos sin plazo o sin monto fijo no podrán superar el límite máximo de endeudamiento ni apartarse de las condiciones que para cada operación establezca el Banco Central de la República Argentina.

Créditos entre casa matriz y/o filiales o subsidiarias

Art. 25. — Para los contratos de crédito externo convenidos entre casa matriz y filiales o subsidiarias de una misma empresa extranjera, o entre éstas, la tasa de interés efectivo anual no podrá exceder en más de dos (2) puntos la de los valores de primera clase vigentes en el mercado financiero del país de origen de la moneda en que se haya registrado la operación. Se entiende que en ningún caso estas tasas podrán ser superiores a las autorizadas por el Banco Central de la República Argentina para los préstamos de que se trata en el artículo 23. A los efectos de la aplicación del presente artículo, se entiende por interés efectivo el monto total que debe pagar el deudor para la utilización del crédito, incluyendo gastos, primas y comisiones de todo orden.

Créditos anteriores

Art. 26. — Los créditos externos con principio de ejecución a la fecha de la publicación de la reglamentación de esta ley en el «Boletín Oficial», deberán adecuar sus prórrogas o modificaciones a lo establecido en los artículos 23 a 25. Los créditos sin monto o sin plazo fijo deberán adecuarse a esas normas dentro del término de un (1) año a partir de esa publicación. Vencido dicho plazo, sin el cumplimiento de estos requisitos no podrá efectuarse remesas al exterior por estos conceptos.

Contratos o convenios

Art. 27. — Los contratos o convenios a que se refiere el inciso c) del artículo 1º, celebrados a partir de la fecha de vigencia de esta ley, sólo autorizarán remesas al exterior una vez aprobados por la autoridad de aplicación.

V. Disposiciones finales

Penalidades

Art. 28. — Se declaran nulos todos los pactos o acuerdos entre socios o accionistas y sindicatos de

acciones tendientes a violar las normas de esta ley y especialmente por los que se otorgue al capital extranjero derechos ocultos de decisión o veto distintos de los que aparezcan ostensibles en los actos que se exhiban o denuncien a la autoridad de aplicación.

Art. 29. — Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior y siempre que los hechos o acciones no configuren delitos o infracciones contempladas en la legislación penal, cambiaria, aduanera y/o tributaria sancionadas con penas más rigurosas, serán sancionados con prisión de dos (2) a ocho (8) años quienes realicen algunas de las siguientes conductas:

- a) Actúen como mandatarios ocultos o realicen cualquier índole de actos o maniobras tendientes a disimular el carácter extranjero de una inversión, permitiendo que la misma aparezca como inversión nacional a los fines de esta ley;
- b) Actúen como mandatarios ocultos o realicen cualquier índole de actos o maniobras tendientes a que una inversión de capital nacional adquiera el carácter y la protección de inversión extranjera;
- c) Realicen acciones o incurran en omisiones tendientes a alterar el valor real de los bienes radicados o a radicar con el propósito de modificar los derechos y obligaciones fijados en la presente ley y/o de ocultar las transgresiones u obviar las prohibiciones que la misma establece;
- d) Actúen como partícipes, cómplices o encubridores de las conductas a que se refieren los incisos a), b) y c). Si lo hicieren en el desempeño de tareas profesionales o de funciones públicas, su sanción llevará además la accesoria de inhabilitación por un término igual al doble de la condena. Estas sanciones no serán susceptibles de cumplimiento condicional y no procederá la excarcelación.

Art. 30. — La comisión de las conductas previstas en el artículo anterior determinará la suspensión transitoria o definitiva de los derechos emergentes de esta ley.

Art. 31. — La responsabilidad emergente de las obligaciones contraídas por una empresa local, receptora de la inversión extranjera, será asumida en forma conjunta y solidaria por el inversor extranjero.

Art. 32. — La autoridad de aplicación y control del cumplimiento de las radicaciones autorizadas será creada por decreto del Poder Ejecutivo nacional dentro del ámbito del Ministerio de Economía y de ella dependerá un registro de inversiones extranjeras. El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley dentro de los ciento veinte (120) días a contar desde su vigencia.

Art. 33. — Facúltase al Poder Ejecutivo a adoptar las providencias necesarias para reconvertir a empresas nacionales en un plazo de tres (3) años a las que habiendo tenido este último carácter se transfirieron a inversores extranjeros mediante el procedimiento de desnacionalización a que se alude en el artículo 6º, inciso d).

Art. 34. — Esta ley es de orden público. El Estado declara que integra el concepto de orden público el principio de respeto a los compromisos estatales. En consecuencia, todo contrato de radicación llevará expresa la cláusula de que el Estado nacional renuncia a discutir a los inversores extranjeros el derecho a la repatriación de la inversión y a la remesa de divi-

dendos que por autorización se les conceda, aunque se hubiesen dictado normas retroactivas en sentido contrario.

Art. 35. — La presente ley rige en todo el territorio de la Nación y deroga las disposiciones de la llamada ley 19.151 y los decretos reglamentarios números 2.400/72 y 7.423/73, así como toda otra norma que resulte incompatible con su vigencia. Todas las presentaciones en trámite, realizadas con anterioridad a la publicación de la presente ley en el «Boletín Oficial», deberán adecuarse a sus normas.

Art. 36. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

José B. Gelbard.

—A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Finanzas.

8

Buenos Aires, 14 de junio de 1973.

Al Honorable Congreso de la Nación.

Tengo el honor de someter a consideración de vuestra honorabilidad el adjunto proyecto de ley por el cual se instituye el régimen del impuesto a la renta normal potencial a las tierras aptas para la explotación agropecuaria.

Este régimen tiene por propósito facilitar, desde un punto de vista racional dentro del sistema del impuesto a los réditos, la tributación de las explotaciones agropecuarias con miras a conseguir efectos de política económica y de política fiscal.

Desde el primer punto de vista, el proyecto estimula a quienes con dedicación y esfuerzo consiguen altos rendimientos a sus predios y al mismo tiempo se propone presionar a los que por negligencia o afán especulativo los mantienen incultos o con bajo nivel de productividad. El accionar en ambos sentidos tiende a fomentar el uso eficiente de la tierra para aumentar el volumen y valor de la producción por selección cualitativa de los productos y por intensidad en la explotación.

Para poner en práctica el sistema, es necesario contar con el mapa utilitario de suelos del país y un catastro agrario cuyo relevamiento llevará un tiempo cuya estimación excede las posibilidades de una rápida instrumentación. Tratándose de una prioridad de urgencia nacional conseguir las metas expresadas en el párrafo anterior, el proyecto que se acompaña prevé un régimen transitorio que tiende a gravar la renta mínima presunta por medio de un impuesto progresivo al valor de la tierra, libre de mejoras.

Se exime del mismo a los predios cuyo valor no permite hacer funcionar el incentivo que representa el impuesto a los fines de una mayor productividad y se impone a los restantes con tasas progresivas cuya escala contempla la capacidad de tributación de los distintos responsables. Estos últimos, mediante un procedimiento ágil y perentorio, deberán formular por declaración jurada la valuación de sus tierras ante la autoridad de aplicación, declaración que será sometida a juntas zonales de catastro agrario y provinciales con representantes de los distintos sectores interesados, a fin de proteger legítimos intereses del sector, pero que al mismo tiempo garantizan instrumentar el impuesto con equidad.

Es muy importante señalar especialmente que el proyecto que os sometemos tiene íntima relación en el aspecto valuación, con el proyecto que también acompañamos en forma separada sobre uso de tierras

aptas para explotación agropecuaria, toda vez que las tierras afectadas por el impuesto de esta ley son declaradas en aquella de utilidad pública y por tanto sujetas a expropiación mediante el pago por el Estado del monto de la valuación que el responsable haga de su predio para el impuesto.

Finalmente se propician también modificaciones al gravamen de emergencia al impuesto a las tierras aptas para la explotación agropecuaria, medidas que encuadran más adecuadamente la carga del sector dentro de la política general de redistribución del ingreso que ya se ha puesto en marcha.

Resumiendo, pues, los propósitos del proyecto, ratificamos que:

1) Trata que el sector agrícola use mejor el recurso tierra, como contribución a la política general que propiciamos de reconstrucción nacional.

2) Persigue por medio del impuesto que el sector agrícola aporte los ingresos fiscales acordes con su obligación tributaria legal, en concordancia con su capacidad de contribución; y

3) El impuesto sirva de herramienta eficaz en la política de redistribución del ingreso.

Dios guarde a vuestra honorabilidad.

HÉCTOR J. CÁMPORA.
José B. Gelbard.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — A partir del 1º de enero de 1975, una vez cumplidas las etapas general del relevamiento catastral e individual de empadronamiento, a que se refiere el artículo 3º de esta ley, modifícase la ley 11.682 (texto ordenado en 1972 y sus modificaciones), en la siguiente forma:

1. Incorpóranse a continuación del artículo 59, los siguientes artículos:

Renta de explotaciones agropecuarias

Artículo 60. — A los efectos de la determinación de la renta neta de las explotaciones agropecuarias ejercidas por personas de existencia visible o sociedades de cualquier naturaleza, salvo en los casos que expresamente se excluyen del régimen, sólo serán de aplicación las normas de los artículos siguientes.

Se considerará también explotación agropecuaria a toda tierra con aptitud para esos fines, cualquiera fuera su uso o destino.

Artículo 61. — Quedan excluidos del régimen que establece el artículo anterior los siguientes predios:

- 1) Los ubicados en zonas boscosas donde se realice exclusivamente explotación forestal y los destinados a forestación o reforestación con fines de ulterior explotación industrial, desde el año de iniciación efectiva de los trabajos y a condición que los respectivos planes de forestación y reforestación hubieran sido aprobados por la Administración Nacional de Bosques u organismos provinciales similares.
- 2) Los sometidos a explotaciones intensivas, cuando dicha explotación no sea típica de la zona. El Poder Ejecutivo determinará el alcance de la presente norma.